Unidad 17

- Procedimientos especiales.

UNIDAD 17

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

17.1 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PRENDA

17.1.1 Generalidades

Es conveniente indicar que el procedimiento al cual se alude en este apartado es un procedimiento especial regulado en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, específicamente en su art 34. Se lleva a cabo para obtener, por parte del órgano jurisdiccional (juez), la autorización correspondiente a fin de vender los bienes o títulos dados en prenda. ¿En qué momento se constituye una prenda para efectos mercantiles? El maestro Mario Bauche Garcíadiego señala que Vivante ha definido la prenda como el contrato por el cual el deudor o un tercero entregan al acreedor una cosa mueble, confiriéndole el derecho de hacerse pago sobre la misma con preferencia a los demás acreedores, si no se les satisface su crédito.' Como ya se dijo, la prenda en materia mercantil está regulada en el art 334 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, que señala Art 334 En materia de comercio, la prenda se constituye:

I Por la entrega al acreedor de los bienes o títulos de crédito, si éstos son al portador,

II Por el endoso de los títulos de crédito en favor del acreedor, si se trata de títulos nominativos y por este mismo endoso y la correspondiente anotación en el registro, si los títulos son de los mencionados en el art 24;

III Por la entrega al acreedor del título o del documento en que el crédito conste, cuando el título o crédito materia de la prenda no sean negociables, con inscripción del gravamen en el registro de emisión del título o con notificación hecha al deudor, según que se trate de títulos o créditos respecto de los cuales se exija o no tal registro;

IV Por el depósito de los bienes o títulos, si éstos son al portador, en poder de un tercero que las partes hayan designado y a disposición del acreedor;

V. Por el depósito de los bienes, a disposición del acreedor, en locales cuyas llaves queden en poder de éste, aun cuando tales locales sean de la propiedad o se encuentren dentro del establecimiento del deudor;

VI Por la entrega o endoso del título representativo de los bienes objeto del contrato, o por la emisión o el endoso del bono de prenda relativo;

VII Por la inscripción del contrato de crédito refaccionario o de habilitación o avío, en los términos del art 326;

VIII Por el cumplimiento de los requisitos que señala la Ley General de Instituciones de Crédito, si se trata de créditos en libros.

17.1.2 Procedencia

Los casos en que procede la ejecución de prenda son tres fundamentalmente. Estas hipótesis están contenidas en los arts 340, 341 y 342 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, que establece lo siguiente

- a) Cuando vence la obligación garantizada mediante prenda
- b) Si el precio de los bienes a títulos dados en prenda, baja, de manera que no baste a cubrir el importe de la deuda y en 20% más.
- c) Si el deudor no cumple la obligación de proporcionarle en tiempo los fondos necesarios para cubrir las exhibiciones que deban enterarse sobre los títulos.

17.1.3 Tramitación

En caso de presentarse alguna de las hipótesis señaladas en el apartado anterior el acreedor puede ocurrir ante el juez competente y solicitar la ejecución de la prenda. Como se señaló, éste es un procedimiento especial que se inicia con la presentación del escrito correspondiente.

En virtud de que ni la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito ni el Código de Comercio indican los requisitos que debe contener el escrito inicial, se debe aplicar en forma supletoria el art 255 del Código de Procedimientos Civiles, el cual indica con precisión los requisitos que han de observarse.

En la solicitud de ejecución de la prenda puede pedirse al juez fundamentalmente

- a) La autorización judicial para la venta del bien dado en prenda
- b) El cambio de depositario si el bien no se encuentra en poder del acreedor c) La entrega del bien
- b) El pago de los gastos y costas que se originen con la tramitación del juicio
- d) La designación de corredor que efectúe la venta a precio de mercado.

Con la solicitud del actor se corre traslado al deudor, para que dentro del término de tres días se oponga a la venta. La oposición que oponga el demandado varía según la hipótesis que se haya presentado: si la solicitud de ejecución fue por vencimiento de la obligación, en la oposición a la venta deberá exhibirse el importe del adeudo. Si la ejecución se solicitó porque el precio de los bienes dado en prenda bajó de manera que no cubriera el importe de la deuda y un 20% más, o porque no se hubiese cumplido con las obligaciones de proporcionar los fondos necesarios para cubrir las exhibiciones que deban enterarse, la oposición deberá basarse en el pago de los fondos requeridos para efectuar la exhibición, o mejorando la garantía por el aumento de los bienes dados en prenda o por la reducción.

Si el deudor no se opone a la venta, el juez mandará que se venda el bien por medio de corredor o de dos comerciantes. El producto de la venta será conservado en prenda por el acreedor en lugar de los bienes o títulos vencidos. Esta disposición, contenida en el art 341 de la Ley de Rtulos y Operaciones de Crédito, parece inentendible. Al respecto Joaquín Rodríguez Rodríguez señala: "Es realmente incomprensible este último precepto de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, en cuanto que si la enajenación se hace para cumplimiento de la obligación, lo lógico es que el producto de la venta pase a poder del acreedor y no crear un valor de sustitución de una obligación ya vencida. Es importante hacer notar que en tales procedimientos, el acreedor prendario no puede hacerse dueño de los bienes dados en prenda sin el consentimiento del deudor por escrito y con posterioridad a la constitución de la prenda, en términos del art 344 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Igualmente cabe apuntar que contra la solicitud de venta de los bienes otorgados en prenda no procede el amparo indirecto.

Finalmente y a fin de tener una idea más clara de lo indicado anteriormente, se transcribe una tesis de los tribunales colegiados que, si bien no constituye jurisprudencia, deja ver con claridad lo señalado en este apartado:

Prenda. Solicitud de la venta de los bienes dados en. No constituye un acto que

pueda reclamarse en juicio de amparo indirecto. La solicitud de la venta de los bienes dados en prenda, con que se inicia el procedimiento que establece el art 341 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito y los actos que de dicho procedimiento deriven, no pueden considerarse ejecutados fuera de juicio, ni tal ejecución es de imposible reparación, dado que dicha solicitud es una consecuencia que deriva de la celebración del contrato de prenda, cuando se vence la obligación y el deudor no cubre el importe del adeudo, y por ello a tal contingencia se obliga dicho deudor al celebrar el contrato de mérito, debiendo señalarse en ese procedimiento, por no existir juicio, ya que en el mismo no puede ofrecer pruebas, ni se da contienda, y en consecuencia no se dicta ningún fallo que resuelva el fondo del negocio, por no plantearse ninguna litis, el tener como único objeto el procedimiento la venta de los bienes dados en prenda, no aplicándose el monto de la operación al pago, sino que viene a sustituir la garantía otorgada, y el multicitado deudor sólo puede oponerse a tal venta exhibiendo el importe del adeudo, siendo esta razón por la cual los actos reclamados no pueden ser analizados en el juicio de amparo, porque la violación de garantías emanará, en todo caso, del juicio que promueva el deudor, en el que se juzgue sobre la exigibilidad de la obligación principal, la nulidad, prescripción, pago parcial o total o cualquier otra causa que la hubiere extinguido total o parcialmente o aplazado, conservando de esta manera el mencionado deudor incólume la garantía de previa audiencia, sin que se contraponga a ello la circunstancia de que el art 46 de la Ley General de Organizaciones y Actividades de Crédito autorice a las organizaciones auxiliares a conservar en su poder el precio que cubra las responsabilidades del deudor, que podrá aplicarse en compensación del crédito, una vez que se haya realizado la venta de los bienes dados en prenda, dado que tal hecho no le impide al deudor hacer las reclamaciones conducentes en un juicio que en su caso promueva según se dijo con antelación. Ahora bien, aun cuando es verídico que no se verá en un nuevo juicio lo relativo a si estuvo o no bien la citación que se hizo en el procedimiento de venta, también lo es que sí podrá demandar al deudor el pago de daños y perjuicios que se le hubieren causado por la venta de los bienes dados en prenda, motivo por el cual se considera correcto el sobreseimiento en el juicio emitido por el juez federal, con fundamento en lo dispuesto por los arts 114, frac III y IV, 73, frac XVIII, y 74, frac III, de la Ley de Amparo.

Amparo en revisión 372188. Guillermo de la Peña Burgos, 20 de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando A. Yates Valdez. Secretario: Marco Antonio Arredondo Elías.³

17.2 EXTRAVÍO O ROBO DE TÍTULO NOMINATIVO

17.2.1 Generalidades

Como se sabe, los títulos de crédito tienen ciertas características esenciales, una de las cuales es la "incorporación", o sea, la característica de que el documento representa el derecho consignado en su texto; por ende, cuando se pierde el documento, se pierden los derechos incorporados en él. En virtud de que lo anterior podría resultar injusto, la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito ha contemplado un procedimiento en favor de aquellas personas que sufren el extravío o robo de un título nominativo. El procedimiento respectivo también es especial y tiene su aplicación, como ya se reiteró, para el caso de robo o extravío del documento.

Antes de iniciar el estudio del procedimiento, es conveniente recordar cuáles son los títulos nominativos; para tal efecto, se debe consultar el art 23 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, el cual dice que son aquellos expedidos en favor de una persona cuyo nombre se consigna en el texto del documento. No obstante, cabe aclarar que el art 24 del mismo ordenamiento señala que cuando por expresarlo así el título o prevenirlo la ley que lo rige, el título deba ser inscrito en un registro del emisor, éste se hallará obligado a reconocer como tenedor legítimo sólo a quien figure como tal en el documento y en el registro.

17.2.2 Procedencia

Como se ha indicado, este procedimiento se lleva a cabo cuando se sufre el extravío o robo de un título nominativo, de conformidad con lo preceptuado por el art 42 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, el cual indica que el propietario del documento cuenta con dos vías para su protección: la reivindicación o la cancelación del título nominativo y, en este último caso, su pago o reposición conforme al procedimiento correspondiente. El maestro Mantilla Molina dice que, en su criterio, cuando se habla de extravío, esta expresión debe entenderse en un sentido amplio.

17.2.3 Tramitación

17.2.3.1 la reivindicación

El maestro Pedro Astudillo Ursúa señala que la acción reivindicatoria tiene un doble efecto: a) declarar, por parte del órgano jurisdiccional, que el actor es dueño del bien reivindicado, y b) condenar al demandado a devolver el bien objeto de la reivindicación. En virtud de lo señalado anteriormente, el ejercicio de esta acción busca, esencialmente, que el órgano jurisdiccional dicte la resolución declarativa correspondiente y, en consecuencia, se condene al tenedor del título nominativo robado o extraviado a devolverlo a su legítimo propietario. El art 42 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito dice que quien sufra el robo o extravío de un título nominativo puede reivindicarlo o pedir su cancelación conforme a los artículos siguientes; sin embargo, los "artículos siguientes" sólo contienen el procedimiento para la cancelación del título extraviado o robado, y omiten señalar algún procedimiento especial para su reivindicación. En tal virtud y con fundamento en el art 1377 del Código de Comercio, el cual establece que todas las contiendas entre partes que no tengan señalada en ese código una tramitación especial se ventilarán en el juicio ordinario, el procedimiento aplicable a la reivindicación es el ordinario mercantil.

17.2.3.2 cancelación

Por cuanto hace a dicho procedimiento, cabe señalar que éste se encuentra regulado expresamente en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, en su art 44. A decir del maestro Rafael de Pina, el objeto de este procedimiento es que el título nominativo quede sin efectos

Debe quedar bien claro que la cancelación del título nominativo es el resultado de un procedimiento judicial, que debe iniciarse con la presentación del escrito correspondiente, el cual podrá reunir los requisitos indicados en el art '55 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. Tal escrito se presenta ante el juez del lugar principal en que el obligado debía cumplir con las prestaciones a que tenía derecho, de conformidad con el art 44 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. El reclamante debe acompañar a su escrito una copia del documento cuya cancelación se solicita y, si no es posible, indicar los mayores datos para identificar el título extraviado. Lo fundamental es indicar los nombres y domicilios de las personas que estaban obligadas. En opinión del maestro Pedro Astudillo Ursúa, la solicitud de cancelar el título nominativo pueden

formularla tanto el titular del documento como el legítimo poseedor de él.' En la solicitud se puede solicitar el pago del título si se trata de uno vencido o su reposición si el título es de vencimiento posterior a la fecha en que su cancelación quede firme. Asimismo, el solicitante tiene derecho a pedir que se suspenda el cumplimiento de las obligaciones consignadas en el título respectivo, para lo cual debe garantizar suficientemente la reparación de los daños y perjuicios correspondientes, en términos del art 42 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Junto con la demanda o dentro de un término de 10 días se debe comprobar la posesión y que se extravió el título o éste fue robado. Si de las pruebas que se aporten existe una presunción grave en favor del reclamante, el juez dictará una resolución mediante la cual

- a) Decreta la cancelación del título y se autoriza a los deudores a pagar al reclamante, si nadie se opone dentro de los 60 días siguientes
- b) Ordena la suspensión de las obligaciones mientras la cancelación es definitiva y si se otorgó garantía c) Manda publicar, en el Diario Oficial de la Federación, un extracto del decreto de cancelación y se notifica al aceptante, girador y girado, librador, librado, etcétera
- c) Previene a los suscriptores para que otorguen un duplicado, si el título es de vencimiento posterior a la fecha de cancelación definitiva d) Manda notificar a la bolsa de valores para que el documento ya no circule.

Quien justifique tener mejor derecho que el reclamante, puede oponerse a la cancelación y al pago o reposición. Se considera que tienen mejor derecho los propietarios del documento, si lo adquirieron de buena fe y sin culpa grave. La ley considera como casos de culpa grave los siguientes

- a) Que se adquiera el título de persona que no aparezca como propietario en el registro respectivo, respecto de títulos cuya emisión o transmisión deba inscribirse en algún registro (art 43, párr segundo, de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito)
- b) Que se adquiera el título después de publicado el decreto de cancelación en la forma y términos previstos por la ley (art 43, párr tercero de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito).

Igualmente se reputa como mala fe:

- a) Adquirir un título en bolsa de valores durante la vigencia de la orden de suspensión y después de hecha la notificación del decreto de cancelación en la forma prevista por la ley (art 43, párr cuarto, de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito) b) Recibir en garantía el título extraviado o robado, lo cual se equipara,

para efectos de mala fe, a la adquisición en propiedad (art 43, párr quinto, de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito).

Si alguien se opone, tal oposición se sustancia con citación del reclamante. Para dar entrada a la oposición, se debe depositar el documento y asegurar si se causan daños y perjuicios. Se corre traslado al reclamante por el término de tres días y la oposición se abre a prueba por un término que no exceda de días, de acuerdo con la naturaleza y calidad del asunto.

Posteriormente, se conceden cinco días para alegar a cada parte y después se dicta la resolución definitiva.

Una vez firme el decreto de cancelación, ya sea porque no se presentó oposición o porque la presentada fue desechada, el promovente puede optar por lo siguiente

1 Reclamar el pago del título, si para entonces es exigible. Esta reclamación se hace en la vía judicial, mediante demanda en la vía ejecutiva mercantil, a la cual se acompañan todas las constancias del procedimiento de cancelación y con base en ellas se despacha ejecución. Así lo preceptúa el art 54 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Es importante destacar que la acción respectiva caduca dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que quede firme la cancelación.

2 Solicitar, con fundamento en el art 53 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, se extienda un duplicado del título, si éste fuere de vencimiento posterior a la fecha en que el decreto de cancelación quede firme. Si los signatarios se niegan a expedir el duplicado, se llevará a cabo un procedimiento para obtenerlo, el cual está regulado en el art 57 de la Ley de Muros y Operaciones de Crédito, que sustancialmente indica: se presenta una demanda ante el juez del domicilio del demandado, acompañada de todas las constancias y documentos que acrediten el derecho del demandante. Con la demanda se corre traslado al demandado por tres días. El negocio se recibe a prueba por el término que fije el juez, según las circunstancias del caso sin que exceda de 20 días. Luego se concede término de cinco días a cada parte para alegar y la resolución se pronuncia dentro de 10. Ningún término puede suspenderse o prorrogarse. Si algún signatario se niega a suscribirlo, el juez lo hará por él y el documento producirá los mismos efectos que el título cancelado. Para este caso, también hay la caducidad si la acción no se ejercita dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que quede firme la cancelación.

Finalmente, cabe aclarar que el art 65 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito concede la acción de cancelación y pago de reposición, con arreglo al procedimiento mencionado, para el caso de destrucción total, mutilación o deterioro grave de un título nominativo. Para mayor claridad se transcribe el citado

precepto Art 65 En los casos de destrucción total, mutilación o deterioro grave, de un título nominativo, el tenedor puede pedir su cancelación y su pago o reposición, con arreglo al procedimiento previsto para los títulos extraviados o robados. Si la destrucción, mutilación o deterioro se refieren a alguna de las firmas, sin afectar las menciones y requisitos esenciales del documento, no será necesaria la cancelación de éste para que el juez lo suscriba por los que se nieguen a hacerlo dentro del procedimiento fijado por el art 57, siendo aplicables los arts 56, 59, 60, 61 y 63, parte final, en lo conducente.